

República de Colombia



Rama Judicial

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Valledupar  
Calle 166, No 9-83 2do piso, edificio Leslie Tel 5700530

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE VALLEDUPAR

Referencia: SOLICITUD DE RESTITUCION Y FORMALIZACION DE TIERRAS	
Solicitante:	RESGUARDO IROKA DEL PUEBLO YUKPA
Radicación:	20001 3121 002 2015 00027 00

Valledupar, dos (2) de octubre de 2015

En atención al escrito presentado por la abogada DULCY MARIA COTES VAN-GRIEKEN, adscrita a la UAEGRTD CESAR-GUAJIRA, quien actúa en representación del RESGUARDO IROKA DEL PUEBLO YUKPA, mediante el cual manifiesta la inconformidad del Resguardo solicitante respecto de la comunicación de la admisión de la solicitud a la ONIC, y solicita la ampliación de las pretensiones.

De igual, se pronunciara el Despacho sobre el memorial poder presentado por el señor EUDE ALONSO RUIZ CHONA y el Oficio No. 006190/MDN-CGFM-CE-DIVO1-BR10-CJM-ASEJU.418 de la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional.

ANTECEDENTES

Mediante auto adiado diecisiete (17) de abril de 2015, se admitió la solicitud de restitución y formalización presentada por la UAEGRTD Cesar-Guajira, a favor del Resguardo Iroka del Pueblo Yukpa; en el numeral décimo tercero de dicho proveído se ordenó: "Comuníquese de la admisión a la ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA (ONIC), para que dentro de sus objetivos, asista a los solicitantes en condyuvancia a la labor de la Unidad de Restitución para la efectividad de los derechos del Resguardo Iroka del Pueblo Yukpa, y se establezca un plan de ayudas básicas de inmediata ejecución, siempre que el estado de urgencia así lo exija, como requisito para proceder a estudiar medidas cautelares de protección a la dignidad, vida e integridad de la comunidad".

Socializada lo anterior medida con el Resguardo solicitante, se conoció que no se sienten representados por la ONIC, razón por lo cual, la apoderada judicial presentó la solicitud que hoy se estudia.

República de Colombia



Rama Judicial

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar  
Calle 16 B, No. 9-83 2do piso, edificio Leslie. Tel.: 5700530

## FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

La solicitud que se estudia se fundamenta en la autonomía de las autoridades indígenas, y específicamente lo dispuesto en el art. 29 del Decreto 4633 de 2011, que es del siguiente tenor: *"En la implementación de este Decreto el Estado respetara todo acto, estrategia o iniciativa autónoma de los pueblos indígenas, como ejercicios políticos, colectivos, que tiene por finalidad la protección de la vida, la libertad y la integridad cultural y la convivencia armónica en los territorios, por cuanto su razón de ser es la prevención de los abusos, así como la defensa y exigibilidad de derechos colectivos, humanos, de contenido humanitario y sociales que tienen los pueblos indígenas"*.

Manifestaron los representantes Yukpa en reunión celebrada el día nueve (9) de julio de 2015, y esto es reproducido por su apoderada que: *"no desean que las medidas cautelares que se dicten para protección sean ineficaces e inocuas, en razón de lo cual, una vez comparada la experiencia del resguardo "MENKUE, MISAYA y LA PISTA" del mismo pueblo YUKPA, prefirieron optar por una alternativa propia de protección a su dignidad e integridad, con efectos equivalentes a un plan de acción, sintetizada en un proyecto integral para el fortalecimiento cultural y la garantía de su soberanía alimentaria, el cual se anexa al presente radicado para estudio e impulso por parte del despacho a manera de medida cautelar..."*

En esa misma reunión efectuaron una reseña histórica del territorio ancestral antes del conflicto armado; manifestaron que han perdido el acceso a los ríos SICARARE y CASACARA, debido a la privatización de la zona, que actualmente están siendo ocupados por ingenios SICARARE y LAS FLORES, afectando las actividades de caza y pesca, fuente ancestral de proteína propia de su dieta; toda vez que ha sido desviado de su cauce natural para alimentar las plantaciones de palma de aceite que se encuentran en el ingenio SICARARE, en virtud de permisos ambientales concedidos por CORPOCESAR.

Por lo que solicita la apoderada, se requiera tanto al MINISTERIO DEL INTERIOR, como a CORPOCESAR a fin de que rindan informe detallado de los permisos ambientales que fueron expedidos para la desviación del río, si fueron o no sometidos a consulta previa, y se estudie la posibilidad de la revocatoria de dichos permisos.

*República de Colombia*



*Rama Judicial*

*Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar*  
*Calle 16 B No. 9-83 2do piso, edificio Leslie, Tel: 5700530*

Con base en esas consideraciones, solicitan la ampliación de las pretensiones, de la siguiente manera:

"DECIMOTERCERA: sírvase ordenar al MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA y DESARROLLO TERRITORIAL, la elaboración de un diagnóstico mediante el cual se identifiquen los impactos ambientales en el territorio de las comunidades que conforman el resguardo de Iroka, a partir del cual se diseñe un plan de mitigación y restauración de los ecosistemas naturales en el territorio del pueblo Yukpa, con el fin de permitir una reparación integral en términos de recuperación de las fuentes de agua y de especies nativas de la región. Lo anterior, debido al deterioro ambiental del territorio".

"DECIMOQUINTA: Sírvase prevenir a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR, CORPOCESAR y a la DIRECCION DE CONSULTA PREVIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, para que se garantice el derecho a la consulta previa del resguardo indígena de iroka ante la ocurrencia de cualquier tipo de afectación que pueda provocar la reglamentación de los tipos de caudal de las aguas de la corriente pública denominada "Río Sicarare" que fluye por la jurisdicción en el municipio de Agustín Codazzi, dado que este rio es una de las principales fuentes hídricas de la serranía del Perijá".

Ampliación orden DECIMA: la cual quedaría en este sentido:

"Sírvase ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATECION Y REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS que elabore un Plan Integral de Reparación que permita el restablecimiento de los derechos vulnerados a las comunidades que la conforman el Resguardo Iroka. Así como un plan de retorno bajo los principios de dignidad sostenibilidad y voluntariedad, y con el enfoque diferencial para la población en situación de desplazamiento forzado".

Esto: "Debido a que muchos de los miembros de la comunidad indígena se encuentran en situación de desplazamiento en condiciones inhumanas en la ciudad de Valledupar y el municipio de Bosconia y requieren una ayuda inmediata, en aras de garantizarles el ejercicio de sus derechos fundamentales".

*República de Colombia*



*Rama Judicial*

*Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Valledupar*

*Calle 166, No 9-83 2do piso, edificio Leslie Tel 5706530*

## CONSIDERACIONES

El Decreto 4633 de 2011 *"Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas"*, dispone: **"AUTONOMIA INDIGENA.** En la implementación de este Decreto el Estado respetará todo acto, estrategia o iniciativa autónoma de los pueblos indígenas, como ejercicios políticos, colectivos, que tienen por finalidad la protección de la vida, la libertad y la integridad cultural y la convivencia armónica en los territorios, por cuanto su razón de ser es prevención de los abusos, así como la defensa y exigibilidad de derechos colectivos, humanos, de contenido humanitario y sociales que tienen los pueblos indígenas".

En el módulo de Formación Autodirigida, *La Restitución de Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas*, de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", en la Unidad 4: La actuación del Juez transicional en la Restitución de Derechos Territoriales, como aspecto transversal, consagra el principio de no interferencia en asuntos internos, de la siguiente manera: *"En principio, ningún actor externo tiene derecho a interferir en asuntos internos del gobierno o jurisdicción especial indígena. La forma de elegir a sus representantes, de hacer seguimiento a sus funciones, de reproducir las estructuras políticas y organizativas y de dirimir conflictos internos son asuntos que hacen parte de la autonomía de los pueblos y de la autoridades externas o terceros no deben buscar resolverlos. Este principio de no interferencia implica también que ningún autoridad debe crear o imponer instituciones políticas u organizativas en territorios indígenas en su territorio sin respetar íntegramente el deber de consultar previamente cualquier iniciativa"*.

Este principio orienta la actuación del Juez de restitución de tierras, en dos sentidos: i) como garantes para que las autoridades competentes de dar aplicación a la tura de reparación y restitución no interfieran en los asuntos internos de los pueblos indígenas, bajo ninguna consideración; y ii) y deberán ajustar su actuación con el fin de potencializar la aplicación de la no interferencia en los casos concretos.

Este respeto por la autonomía de los pueblos se basa en el carácter pluriétnico de la Nación. En tanto, el Despacho como garante del principio antes reseñado, y teniendo conocimiento que el Resguardo solicitante no se siente representado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, entidad a la cual se le comunicó la admisión de la solicitud con el único fin de ventilar la problemática de la comunidad Iroka a efectos de canalizar medidas cautelares. Por lo



República de Colombia



Rama Judicial

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar

Calle 16 B, No. 9-83 2do piso, edificio Leslie, Tel.: 5700530

que, siendo la oportunidad para ello, se procederá a dejar sin efectos la orden Décima tercera del auto admisorio y en las etapas subsiguientes del proceso, se abstendrá de proferir ordenes que vinculen o involucren a la ONIC.

No obstante lo anterior, este Despacho, queriendo establecer de primera mano la realidad vivida por la comunidad del Resguardo Iroka, ha adelantado con colaboración de la Gobernación y de la Unidad de Restitución-Cesar-Guajira, las gestiones tenientes a lograr una visita al territorio del Resguardo, con el fin específico de decretar, de ser necesarias, medidas cautelares que propendan por mejorar las condiciones de sus habitantes y del Resguardo en general. Es por ello que, mediante oficios No. 1255 y 1271 de 9 y 13 de julio de la anualidad (folios 818 y 821 del cuaderno 2 original), se requirió al EJERCITO NACIONAL-BATALLON LA POPA, *"para que mediante transporte aéreo (helicóptero) brinde acompañamiento a la zona donde se encuentra ubicado el resguardo indígena de Iroka esto es en la Vereda 7 de agosto del Municipio de Agustín Codazzi, Departamento del Cesar"*.

Mediante oficio No. 006190 de 14 de julio de 2015, la Décima Brigada del Ejército Nacional, representada por el Teniente Coronel JOSE ALIRIO MONROY VELASQUEZ, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Décima Brigada Blindada (E), da respuesta a los anteriores requerimientos manifestando que: *"esta Unidad Operativa Menor no se encuentra autorizada para efectuar mencionado (sic) requerimiento, toda vez que de acuerdo al Oficio No. 119/MDN-CGFM-CE-36 suscrito por el General Juan Pablo Rodríguez Barragán en su momento Comandante del Ejército, la solicitud para un apoyo a cualquier ente gubernamental y/o judicial debe obedecer al siguiente procedimiento...."*

Y detalla los pasos que se deben agotar, bajo el fundamento que les está prohibido a los generales comandantes de comandos conjuntos, fuerzas de tarea conjunta, divisiones y brigadas autorizar misión de apoyo a entidades gubernamentales.

Como quiera que es de gran importancia que este juzgador obtenga información real y concreta de la situación actual de Resguardo, insistirá en el acompañamiento de las Fuerzas Militares, motivo por el cual remitirá la respuesta dada por Teniente Coronel JOSE ALIRIO MONROY VELASQUEZ, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Décima Brigada Blindada (E), a la GOBERNACION DEL CESAR y a la UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS, CESAR-GUAJIRA, a fin de que se aúnen esfuerzo en propósito que se persigue. De igual forma, vincular en dicha diligencia a la defensora pública, abogada ZAIDA DEL CARMEN CARRILLO MAESTRE.

República de Colombia



Rama Judicial

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar  
Calle 16 B, No. 9-83 2do piso, edificio Leslie, Tel.: 5700530

No obstante, antes de proferirse esta decisión, la Gobernación del Cesar, por intermedio del profesional especializado de etnias, informa al despacho que en cumplimiento de la orden judicial referida a la solicitud de acompañamiento del Ejército, adelantaron acciones que determinaron la imposibilidad de la consecución de helicóptero para la visita al resguardo, debido a motivos de seguridad frente los últimos accidentes aéreos sucedidos en el país, los cuales deben ser investigados.

Con el Decreto 4633 de 2011 se busca: *"generar un marco legal e institucional de la política pública de atención integral, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales para los pueblos y las comunidades indígenas como individuos y como sujetos colectivos"*

Propuesta de atención diferencial elaborada por las comunidades YUKPA, Resguardo Iroka.

El derecho a la reparación integral que le asiste a toda víctima de la violencia, implica que la misma sea transformadora, pues una de las vocaciones de la justicia transicional es precisamente garantizar, proteger y restablecer los derechos de las víctimas en condiciones de dignidad. En tal sentido, el proceso de restitución de tierras cobra vital importancia, toda vez que genera espacios de transformación de la realidad problemática puesta de presente.

El Decreto 4633 de 2011, reglamentario de la Ley 1448 de 2011, aplicable a los procesos de reconocimiento de derechos territoriales indígenas, contempla en el Título V, los derechos a la reparación integral, a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición (art. 109 a 120), a través de las medidas de satisfacción para los pueblos indígenas. En este mismo cuerpo normativo, se definió el concepto de daño (art 41 a 46), y se estableció la aplicación del enfoque diferencial al interior de los pueblos indígenas. En razón precisamente, en este enfoque diferencial, los operadores judiciales, deben abordar su función a fin de lograr una reparación integral. De igual forma, el capítulo II del Título III, establece las *medidas de protección colectiva a los pueblos indígenas: contempla las medidas de protección colectiva y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas; la implementación de medidas de protección de los derechos territoriales y de la autonomía y las comunidades; los sistemas de protección propia y los planes de protección de*

República de Colombia



Rama Judicial

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar

Calle 16 B, No. 9-83 2do piso, edificio Leslie, Tel. 5700530

normativo, se definió el concepto de daño [art 41 a 46], y se estableció la aplicación del enfoque diferencial al interior de los pueblos indígenas. En razón precisamente, en este enfoque diferencial, los operadores judiciales, deben abordar su función a fin de lograr una reparación integral.

De igual forma, el capítulo II del Título III, establece las *medidas de protección colectiva a los pueblos indígenas: contempla las medidas de protección colectiva y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas; la implementación de medidas de protección de los derechos territoriales y de la autonomía y las comunidades; los sistemas de protección propia y los planes de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de los pueblos y comunidades indígenas en situación de riesgo extraordinario o extremo [art. 56 a 64]* y no limitándose a la devolución del bien inmueble o su legalización de acuerdo a la normativa vigente, se trata de un espacio, que bajo unas leyes especiales, intenta recomponer el daño ocasionado al tejido social por un conflicto que cobra vidas indiscriminadamente. Y ese daño se repara cuando se busca cambiar la realidad, en consecución a los fines del Estado colombiano.

El Decreto 4633 de 2011, reglamentario de la Ley 1448 del mismo año, aplicable a los procesos de restitución de los territorios indígenas, contempla en el Título V, los derechos a la reparación integral, a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición [art. 109 a 120], a través de las medidas de satisfacción para los pueblos indígenas. En este mismo cuerpo normativo, se definió el concepto de daño [art. 41 a 46] y se estableció la aplicación del enfoque diferencial al interior de los pueblos indígenas. Y con base precisamente en este enfoque diferencial, los operadores judiciales, deben abordar su función a fin de lograr una reparación integral. De igual forma, el capítulo II del Título III, establece las *medidas de protección colectiva a los pueblos indígenas: contempla las medidas de protección colectiva y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas; la implementación de medidas de protección de los derechos territoriales y de la autonomía y las comunidades; los sistemas de protección propia y los planes de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de los pueblos y comunidades indígenas en situación de riesgo extraordinario o extremo [artículos 56 a 64]*”.

1 ABC del Decreto-Ley sobre víctimas de los pueblos indígenas. Embajada de Suecia y PNUD de las Naciones Unidas.

*República de Colombia*



*Rama Judicial*

*Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar*  
*Calle 16 B, No. 9-83 2do piso, edificio Leslie, Tel.: 5700530*

Pues bien, como se trata de sujetos de derecho de especial protección, toda intervención estatal, sea administrativa o judicial, debe consultar dos importantes principios, a saber: *unidad y autonomía indígena, garantía de prevalencia física y cultural*.

Es por eso que la Constitución Política de 1991, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación (art. 7). En razón a ello, la H. Corte Constitucional, en la Sentencia T-601 de 2011, sobre los derechos de los pueblos indígenas o tribales y la protección constitucional, señaló: *"La Constitución señaló como un deber estatal el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana, correspondiéndole garantizar la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país, lo cual se complementa con la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, el respeto a la autodeterminación de los pueblos en el manejo de las relaciones exteriores y el reconocimiento de que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios"*.

Ha dicho la H. Corte en la sentencia C-463 de 2014, que: *"En armonía con los principios citados, la Constitución Política de 1991 previó un amplio espacio para el ejercicio de la autonomía de las comunidades indígenas: el artículo 9º defiende el principio de la auto determinación de los pueblos, los artículos 246 y 286 concreta ámbitos específicos para el ejercicio de la autonomía, y el 330 Superior prevé la constitución de entidades territoriales indígenas, confiriéndoles así los atributos de la autonomía territorial"*.

El reconocimiento de la diversidad étnica implica el derecho al respeto de su autonomía como pueblo, entendida esta como: *"la facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones y mecanismos, dentro del marco del Estado del cual forman parte"*.

El marco de garantías constitucionales viene internacionalmente dado por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991, instrumento que consagra el enfoque



*República de Colombia*



*Rama Judicial*

*Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar*  
*Calle 16 B No. 9-83 2do piso, edificio Leslie, Tel.: 5700530*

por el respeto por la diferencia y promoción de los pueblos aborígenes, integrado al bloque de constitucionalidad.

En ese sentido, otro importante marco normativo de la esfera nacional, lo constituye el Decreto 1953 de 2014<sup>2</sup>, que establece los parámetros para hacer efectivo el derecho a su autodeterminación. Su fundamento constitucional lo encuentra en el art. 329 Superior, el cual es del siguiente tenor: *"La conformación de las entidades indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial"*

*Los resguardos son propiedad colectiva y no enajenable.*

*La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.*

*(...)"*

Un breve análisis de esa norma, frente a las disposiciones del Decreto 4633 de 2011, permitirán determinar la importancia del proceso de restitución y reconocimiento de los derechos territoriales indígenas, frente al respeto por la autodeterminación del pueblo indígena. Así, el artículo 4º del Decreto 4633, fija el PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO INDIGENA COLOMBIANO, de la siguiente manera: *"Para efectos del presente decreto, el Estado reconoce la unidad, la autonomía, la cultura y el territorio como principios rectores para implementación de las medidas del presente decreto"*.

Y dice el art. 5, que la reparación integral y restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos indígenas, se entenderá como: *"el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial"*. Y establece que el restablecimiento se entenderá como un proceso que contiene medidas y acciones

<sup>2</sup> Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política.

884

República de Colombia



Rama Judicial

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar

Calle 16 B, No. 9-83 2do piso, edificio Leslie, Tel: 5700530

transformadoras, justas y adecuadas que se dirigen a fortalecer la autodeterminación y la institucionalidad propia y garantizar el goce efectivo de sus derechos territoriales.

De igual forma, el proceso de restitución debe garantizar la pervivencia física y cultural de estos pueblos: *"Para ello, propenderá por eliminar las condiciones y situaciones de vulnerabilidad y riesgos, en especial las descritas por la jurisprudencia nacional e internacional*

*Las medidas y acciones de reparación integral deben contribuir a garantizar la permanencia cultural y la pervivencia de los indígenas como pueblos, conforme a su plan de vida oral o escrito, su ordenamiento ancestral, su cosmovisión y/o ley de origen, ley natural, derecho mayor o derecho propio. Asimismo, estas medidas deberán ajustarse a los estándares nacionales e internacionales de reparación integral a los pueblos indígenas, de manera que garanticen las condiciones para que estos puedan tener un buen vivir con garantías de seguridad, autonomía y libertad". (Art. 6).*

Históricamente los derechos de los pueblos indígenas han sido vulnerados y desconocidos, y el conflicto armado ha agravado en gran medida esa problemática. Es por ello que en el II Informe de seguimiento a la aplicación en Colombia de las recomendaciones del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, 2010-2013. Resumen Ejecutivo, se concluyó que en el país se dieron importante avances normativos relativos a la reparación de las víctimas indígenas, no obstante en la realidad su efectividad no alcanza los propósitos normativos. Textualmente se dijo: *"[L]a precaria situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia refleja el desfase entre una legislación nacional avanzada y la poca efectividad real de las instituciones encargadas de su protección, en el marco de un conflicto armado interno en el cual participación numerosos contendientes cuya acción incide en las posibilidades de supervivencia de las comunidades autóctonas"*<sup>3</sup>.

El informe identifica las causas del creciente riesgo de extinción física y cultural en que se encuentran los pueblos indígenas, entre las cuales se encuentran: la violencia sociopolítica, el

<sup>3</sup> Naciones Unidas, citado supra en Nota 1, Párr. 81

*República de Colombia*



*Rama Judicial*

*Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar*  
*Calle 16 B No. 9-83 2do piso, edificio Leslie, Tel.: 5700530*

conflicto armado, la presión sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales y el desplazamiento forzado, así como las políticas y normas que privilegian el modelo económico neoliberal basado en actividades extractivas. Que de igual forma, vulnera sus derechos territoriales.

Ahora, respecto del modelo de desarrollo económico<sup>4</sup>, los pueblos indígenas enfrentan un verdadero desafío, pues los mismos han sido concebidos como prioridad para los planes de desarrollos nacionales y departamentales, pero para favorecer a las industrias y grandes empresarios. Por lo tanto, el II Informe critica y evidencia los planes nacionales de desarrollo, los cuales *"no han otorgado prioridad al reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Por el contrario, uno de sus objetivos centrales ha sido el crecimiento económico basado en el fomento de los proyectos minero-energéticos, agro-comerciales y de infraestructura, en beneficio de las empresas privadas.*

*Además, la ausencia de una política agraria que garantice los derechos humanos de los pueblos indígenas y otras comunidades rurales (territoriales, soberanía alimentaria, etc), junto con la prioridad otorgada a la adopción de medidas legislativas y de política pública a favor de las actividades mineras, energéticas y de infraestructura, ha incrementado el riesgo para los derechos territoriales y la sobrevivencia de los pueblos indígenas".*

Como consecuencia de lo anterior, el legislador colombiano, adoptó una serie de importantes herramientas que buscan el restablecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, con vocación transformadora, lo cual quiere decir que no solo devuelve a las víctimas al estado en que se encontraban antes de la violación de sus derechos, sino que los mismos deben comportar mejorías y garantías de respeto. Dentro de esos mecanismos, se señala el proceso de restitución. El cual abre el sendero a la aplicación y efectividad de las medidas de reparación. Sin embargo, esta reparación se ve torpedeada por factores como: la violencia paramilitar, el involucramiento de la población indígena en conflicto armado, la militarización de los territorios ancestrales, la

<sup>4</sup>Que permite la ejecución de grandes proyectos de minería, energético, agroindustriales y de infraestructura.

*República de Colombia*



*Rama Judicial*

*Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar*  
*Calle 16 B No. 9-83 2do piso, edificio Leslie, Tel.: 5700530*

vulnerabilidad de los mismos ante los proyectos económicos, y la impunidad para los responsables de los crímenes<sup>5</sup>

Este persistente estado de vulneración y vulnerabilidad fue reconocido por la H. Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, que estudia y fija el criterio sobre la *"Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión"*. Declarando en peligro de extinción a un considerable número de comunidades indígenas en territorio colombiano, bajo el reconocimiento de *"que los pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados cultural y físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y de Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas"*.

En el caso *sub examine*, la problemática del Resguardo Indígena Yukpa de Iroka de la Serranía del Perijá, se describe en la justificación del proyecto de fortalecimiento cultural y seguridad alimentaria, los factores que han incidido en la vulneración de sus derechos fundamentales y la especial protección que ha establecido la Constitución Nacional, entre ellas se extrae: el otorgamiento por parte del Estado de títulos de adjudicación de territorio ancestral, considerados baldíos por el hecho del desplazamiento de sus habitantes, como consecuencia del conflicto armado; los cultivos ilícitos que produjo la tala indiscriminada de árboles ocasionando la esterilidad de la tierra y las fumigaciones aéreas sobre dichos cultivos; nulo acceso a la reserva alimentaria, debido a dos aspectos, a saber: i) el fenómeno del niño (cambio climático) y ii) tierra no apta para la agricultura; las evaluaciones técnicas desarrolladas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de minerales, sin que haya mediado consulta previa; los cultivos de palma en la parte baja y plana de la Serranía del Perijá demanda un uso excesivo de agua, desviando el cauce del río Sicarare, que ha sido vital y sustento para el Resguardo Yukpa de Iroka.

---

<sup>5</sup> II Informe, pág. 6.



*República de Colombia*



*Rama Judicial*

*Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar*  
*Calle 16 B No. 9-83 2do piso, edificio Leslie. Tel.: 57005530*

Las anteriores afectaciones ambientales impactan de manera significativa en la supervivencia de la comunidad indígena, en razón a la especial relación que este pueblo mantiene con la naturaleza y el uso de los recursos que esta proporciona. Especialmente en lo atinente al agua.

Cierto es que el cambio climático ha ocasionado un cambio abrupto del sistema de lluvias, lo cual obedece lógicamente a cuestiones naturales que no dependen de la voluntad del hombre; sin embargo, en este caso particular, se evidencia la adopción de normas y políticas que contrarían la protección de los derechos de los pueblos indígenas, a través de las cuales se privilegia el modelo económico, sin respeto de estos derechos inalienables, y que permiten que las empresas cultivadoras de palma africana desvíen el cauce del río Sicarare para su exclusivo disfrute. En el taller realizado en la comunidad Seku Ape Yiwano, al respecto de esta circunstancia se evidenció que: *"Estos cultivos se han apropiado de las fuentes de agua a través de ojos de agua y pozos que son alimentados por los ríos que estas comunidades utilizaban para pescar y que hoy en día están secos"*.

Ha dicho la UNESCO, en su libro EL AGUA Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS<sup>6</sup>: *"La conexión espiritual con el agua que las sociedades indígenas mantienen como aspecto integral de su cultura, es causa de innumerables conflictos por los recursos hídricos con las fuerzas de explotación externas, predominantemente occidentales. Si bien los valores de la cultura occidental consideran en cierta medida la dimensión espiritual del agua, es la perspectiva de principalmente una minoría. El sistema de valores dominante que determina cómo se utilizan los recursos hídricos en la cultura occidental es básicamente el económico. En las sociedades indígenas la situación se revierte. La perspectiva cultural dominante confiere gran importancia a los aspectos espirituales de los recursos hídricos y los cuerpos de agua. Sin embargo, los debates internos en torno a las opciones de explotación, a menudo reflejan los intereses económicos promovidos por la sociedad externa dominante. Un entendimiento más explícito del sistema de valores indígenas por parte del mundo occidental, ayudaría a aliviar la presión cultural sobre las sociedades indígenas y, en la medida que el Occidente emule las nociones indígenas de la función de la humanidad en relación con la naturaleza, se beneficiaría la causa del desarrollo"*.

---

<sup>6</sup> David Groenfeldt es antropólogo y Director Ejecutivo de Santa Fe Watershed Association ([www.santafewatershed.org](http://www.santafewatershed.org)), en Santa Fe, Nuevo México. También escribe y desarrolla consultorías sobre políticas y planeación del agua, relacionadas particularmente con cuestiones que atienden al agua de los pueblos indígenas, sostenible a nivel mundial.





Es así como para los Yukpa de Iroka, el agua es una fuente de subsistencia, pues les provee alimentos y les facilita el cultivo de otros.

Teniendo en cuenta esta situación especial de vulneración del pueblo Yukpa de Iroka, surge la necesidad de implementar medidas de restablecimiento de derechos, y el proyecto de fortalecimiento, tiene arraigo en la necesidad de sobreponerse y superar las causas de las afectaciones a sus derechos fundamentales. Y esta protección se funda en la garantía de las comunidades en la participación de los recursos públicos. El art. 8 del Decreto 1953, así lo dispone: *"Artículo 8. Financiación. El ejercicio de las competencias y funciones públicas asignadas a los Territorios Indígenas se financiará con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones correspondientes a cada sector. La asignación especial del SGP de los Resguardos Indígenas se destinará para financiar los proyectos de inversión de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. Los gastos establecidos en el presente Decreto que no correspondan al Sistema General de Participaciones SGP, serán financiados con cargo a las apropiaciones presupuestales que hayan sido legalmente definidas para el efecto..."*

El artículo 29 de ese mismo Decreto, establece los documentos que se deben presentar a la Dirección Nacional de Planeación a fin de que los Resguardos Indígenas administren y ejecuten los recursos del Sistema General de Participación. Estos son:

*"1. Un documento que se enmarque el plan de vida o su equivalente de cada pueblo, territorio o resguardo, conforme la ley de origen, derecho mayor o derecho propio respectivo. En este documento se deben identificar, como mínimo, los siguientes aspectos:*

- Las necesidades de inversión de la comunidad.
- Los objetivos, metas y costos de financiamiento de cada una de las necesidades identificadas en los diferentes sectores y/o proyectos de inversión.
- Los Proyectos de inversión cuando haya lugar.



2. Un documento donde se acredite la experiencia y/o buenas prácticas en la ejecución de recursos de cualquier fuente de financiamiento, de conformidad con los parámetros y con el procedimiento que defina el Gobierno, previa consulta con la Mesa Permanente de Concertación.
3. el ata de la Asamblea General aprobada por las comunidades que habitan el respectivo Resguardo Indígena, en el que aprueben la solicitud para la asunción de las funciones, y la administración y ejecución directa de los recursos a que se refiere el presente Decreto.
4. Una copia de las actas donde conste la designación del Consejo Indígena o estructura colectiva similar de gobierno propio y del Representante Legal, debidamente registrados ante el Ministerio del Interior.
5. Una copia del reglamento, estatuto o mandato vigente del Resguardo respectivo donde se recojan las reglas y procedimientos propios para la designación del consejo indígena u otra estructura similar de gobierno propio y del representante legal.
6. Los datos de contacto del representante legal".

Teniendo en cuenta que los recursos de asignación especial del SGP, según el art. 32 del Decreto 1953 de 2014, se ejecutan como proyecto de inversión, que se deberán incluir en el presupuesto anual de inversión, y que deberán contener:

- I. Nombre del proyecto.
- II. Información básica sobre el resguardo:
  1. Nombre del resguardo.
  2. Localización.
  3. Población total
  4. Número de familias
  5. Grupo(s) étnico(s)
- III. Clasificación del proyecto:
  1. Sector de inversión
  2. Subsector o usos y costumbres
- IV. Localización del proyecto:
  1. Comunidad(es)
  2. Familia(s)
  3. Municipio(s)
  4. Departamento(s)
- V. Población beneficiaria del proyecto:
  1. Número de habitantes
  2. Número de familias
- VI. Justificación
- VII. Objetivo principal



VIII. Descripción

IX. Monto total de la inversión:

- 1- Servicios personales
- 2- Gastos generales
- 3- Otros gastos
- 4- Total

X. Fuentes de financiación

1. Recursos de participación
2. Recursos de cofinanciación (Si los hay)
3. Otros recursos.

XI. Fecha de iniciación.

XII. Fecha de finalización.

XIII. Firma del responsable.

**Parágrafo.** De los recursos asignados a los proyectos, se podrá disponer hasta el diez por ciento (10%) para financiar gastos operativos de los proyectos de inversión, porcentaje que podrá ser ejecutado de manera directa".

Aterrizando en el caso *sub lite*, tenemos que, el Resguardo solicitante, a través de su apoderado judicial adscrita a la Dirección Territorial Cesar-Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras, presentó ante esta instancia el proyecto: "*FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA SEISCIENTAS (600) FAMILIAS QUE INTEGRAN LOS CINCUENTA Y SIETE (57) ASENTAMIENTOS DEL RESGUARDO INDIGENA YUKPA DE IROKA*", una propuesta integral que permita asegurar la supervivencia de la comunidad indígena del Resguardo Yukpa de Iroka. Un programa social surgido del seno de la propia comunidad indígena, en opción de solución a la problemática que afronta, y que tiene su fundamento en la autonomía en garantía al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural (Art. 7 C. Pol.).

El proyecto integra unos componentes esenciales para cambiar la realidad que pretende intervenir, no obstante, es del interés de este juzgador, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto involucra directamente institucionales administrativas y presupuesto público, crear un enlace entre el gobierno nacional, departamental y local y la comunidad del Resguardo Yukpa de Iroka, haciendo menester remitir al Municipio de Agustín Codazzi, Departamento del Cesar, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia -UARIV-, entre otras entidades competentes. De igual forma, es preciso

*República de Colombia*



*Rama Judicial*

*Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar*  
*Calle 16 B No. 9-83 2do piso, edificio Leslie, Tel.: 5700530*

trasladar al Resguardo los requisitos que deben cumplir para la ejecución del proyecto, con el fin de que el mismo sea adecuado a tales parámetros.

Ahora, y en cuanto al memorial poder presentado por el señor EUDE ALONSO RUIZ CHONA, heredero del señor OLIVERIO RUIZ, a favor de la defensora pública, abogada ZAIDA DEL CARMEN CARRILLO MAESTRE, por venir ajustado a la ley, se reconocerá personería jurídica para actuar en su nombre y representación.

En consecuencia, el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE VALELDUPAR**, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** DEJAR SIN EFECTOS el numeral décimo tercero del auto admisorio de la solicitud.

**SEGUNDO:** ORDENAR al MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA y DESARROLLO TERRITORIAL, la elaboración de un diagnóstico mediante el cual se identifiquen los impactos ambientales en el territorio de las comunidades que conforman el resguardo de Iroka, a partir del cual se diseñe un plan de mitigación y restauración de los ecosistemas naturales en el territorio del pueblo Yukpa, con el fin de permitir una reparación integral en términos de recuperación de las fuentes de agua y de especies nativas de la región. Lo anterior, debido al deterioro ambiental del territorio.

**TERCERO:** OFICIAR a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR- y a la DIRECCION DE CONSULTA PREVIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, para que se garantice el derecho a la consulta previa del resguardo indígena de Iroka ante la ocurrencia de cualquier tipo de afectación que pueda provocar la reglamentación de los tipos de caudal de las aguas de la corriente pública denominada "Río Sicarare" que fluye por la jurisdicción en el municipio de Agustín Codazzi, dado que este río es una de las principales fuentes hídricas de la serranía del Perijá.

**CUARTO:** REMITIR el cuadernillo contentivo del proyecto *FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA SEISCIENTAS (600) FAMILIAS QUE INTEGRAN LOS CINCUENTA Y SIETE (57) ASENTAMIENTOS DEL RESGUARDO INDIGENA YUKPA DE IROKA*, a Municipio de Agustín Codazzi,

*República de Colombia*



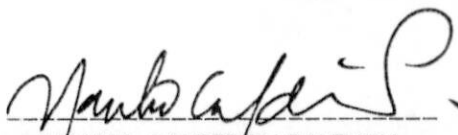
*Rama Judicial*

*Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar*  
*Calle 16 B No. 9-83 2do piso, edificio Lesho, Tel.: 57005330*

Departamento del Cesar, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia -UARIV-.

QUINTO: TRASLADAR al Resguardo solicitante, los requisitos contenido en el art. 32 del Decreto 1953 de 2014, a fin de adecuar, en la medida que se requiera, el proyecto a los parámetros ahí establecidos.

SEXTO: RECONOCER personería jurídica a la defensora pública, abogada ZAIDA DEL CARMEN CARRILLO MAESTRE, identificada con cédula de ciudadanía No. 49.739.878 y portadora de tarjeta profesional No. 50.591 del Consejo Superior de la Judicatura.

  
MANLIO CALDERON PALENCIA  
EL JUEZ